



## Redes sociales, periodismo de datos y democracia monitorizada

Andreu Casero-Ripollés, Universitat Jaume I de Castellón (UJI, España), [casero@uji.es](mailto:casero@uji.es)

Amparo López-Meri, Universitat Jaume I de Castellón (UJI, España), [meri@uji.es](mailto:meri@uji.es)

### Resumen

Las redes sociales están provocando cambios en el periodismo que van más allá de la producción, la distribución y el consumo de información y que tienen impacto sobre la democracia. En este sentido, destaca la aparición de nuevos actores informativos, vinculados a la sociedad civil, que, desde Internet y las redes sociales, practican el periodismo de datos y, con ello, generan una fiscalización y un escrutinio permanente de los centros de poder. El objetivo de este capítulo es analizar las características, actividad e incidencia de estas plataformas digitales. La metodología aplicada se basa en el estudio de cuatro casos: mySociety, Sunlight Foundation, Ciudadano Inteligente y Fundación Civio. Los resultados sugieren que estas iniciativas contribuyen a la renovación del periodismo de investigación y a la extensión de la democracia monitorizada.<sup>10 11</sup>

---

<sup>10</sup> Este trabajo forma parte del proyecto de investigación «*Medios sociales y activismo político en Internet: hacia una redefinición de los vínculos entre la comunicación y la democracia en la era digital*» beneficiario de la «I Convocatoria de Ayudas Fundación BBVA a Investigadores, Innovadores y Creadores Culturales» concedida en 2014. La Fundación BBVA no se responsabiliza de las opiniones, comentarios y

**Palabras clave:** periodismo, redes sociales, democracia, monitorización, periodismo de datos y comunicación política.

## 1. Introducción

LAS redes sociales y el entorno 2.0 están introduciendo numerosas transformaciones en el campo del periodismo. Una de ellas es especialmente significativa por su conexión con los cambios informativos y democráticos. Se trata de la aparición de nuevos actores informativos, procedentes de la sociedad civil, que practican el periodismo de datos y que, con ello, generan una fiscalización y un escrutinio permanente de los centros de poder. Se trata de plataformas que reúnen dos de las potencialidades más relevantes de la web 2.0: la capacidad de producir y difundir información de manera autónoma (Castells, 2009) y la competencia de empoderar a la ciudadanía (Jenkins, 2006), otorgándole un contrapoder para incidir sobre el sistema político, condicionando su comportamiento, sus acciones e, incluso, sus decisiones (Casero-Ripollés, 2010). Con ello, su actividad afecta tanto a la renovación del periodismo de investigación como a la extensión de la democracia monitorizada.

La aparición de estos nuevos actores informativos, vinculados a la sociedad civil, está conectada al fenómeno del *big data* (Mayer-Schönberger y Cukier, 2013). El desarrollo de Internet, en general, y de las redes sociales, en particular, ha propiciado un doble proceso en este sentido. Por un lado, ha generado un gran volumen de datos disponibles que no dejan de crecer cada día. Éstos incluyen bases de datos, repositorios o plataformas de información pública. Estas últimas están vinculadas a la creciente introducción de mayor transparencia en los procesos políticos y en las administraciones públicas, mediante leyes específicas, y al avance del gobierno abierto (*open government*). Con ello, se han liberado y se han puesto en línea, a disposición de cualquier ciudadano, numerosos datos sobre la

---

contenidos incluidos en este capítulo ni de los resultados derivados del mismo, los cuales son total y absoluta responsabilidad de los autores.

<sup>11</sup> Este trabajo forma parte del proyecto de I+D CSO201452283-C2-1-P, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) del Gobierno de España.

actividad de las instituciones políticas. Junto a esta información, la expansión de Internet y las redes sociales también ha generado un amplísimo volumen de datos sobre el comportamiento digital de los usuarios que incluye aspectos tan variados como sus consultas en buscadores, sus visitas a páginas web, su consumo de música o vídeo en portales especializados, sus interacciones con contactos y amistades o sus mensajes difundidos a través de perfiles o blogs. Toda esta actividad genera grandes cantidades de información cuyo uso puede ser tanto comercial, para ser vendido a los anunciantes para crear publicidad segmentada (Fuchs, 2014), como político, para identificar a los públicos y lanzarles mensajes personalizados, o periodístico, para producir nuevos tipos de reportajes y noticias.

El elevado volumen de información disponible, y su potencial explotación, ha generalizado la aparición de instrumentos para analizar esa gran cantidad de datos. Se trata de aplicaciones y programas, asociados a la analítica web y a las métricas de las redes sociales, que permiten procesar los datos y también ofrecer una visualización atractiva de los resultados mediante gráficos interactivos (Sánchez-Bonheví y Ribera, 2014).

Ambos factores están en la base de la aparición del periodismo de datos que aplica nuevas técnicas para la creación de informaciones a partir del procesamiento, la comparación y el análisis de grandes cantidades de datos disponibles en Internet. Eso exige la combinación de competencias específicas de búsqueda de datos, de manejo de herramientas estadísticas para tratarlos y de uso de interfaces y programas de visualización de la información (Flores Vivar y Salinas Aguilar, 2013).

El periodismo de datos abre la posibilidad de elaborar nuevos productos informativos cuyo objetivo es descubrir tendencias, patrones y comportamientos atípicos recopilando y tratando datos (Chaparro Domínguez, 2014). Por ello, está estrechamente vinculado al periodismo de investigación puesto que aspira a descubrir cosas a través de los datos. La capacidad para acceder a grandes cantidades de información en bruto y para procesarla y analizarla mediante herramientas informáticas permite renovar y reforzar el periodismo de investigación que, en los últimos tiempos, había experimentado un retroceso debido a la reducción de costes de producción en las

empresas mediáticas, motivado por la crisis del sector, y a su escaso interés de enfrentarse a los poderes políticos y económicos.

Pero también a través del tratamiento periodístico de los datos disponibles en Internet y las redes sociales se puede realizar una tarea de contrapoder para revitalizar la democracia (Sampedro, 2014). Específicamente, este tipo de periodismo facilita el escrutinio de las actividades de los actores políticos, económicos e, incluso de los propios medios de comunicación. Esto conecta su práctica a la rendición de cuentas puesto que, a través de los datos, se pueden crear productos o plataformas que ofrezcan información a los ciudadanos sobre la tarea de los parlamentarios, las actividades de los *lobbies* o grupos de presión, las partidas y cuestiones en las que se invierten los recursos públicos o la financiación de los partidos políticos y sus campañas electorales mediante donaciones, entre otros aspectos. De esta forma, a través de los datos y su tratamiento periodístico, se defiende el interés público provocando una extensión de la función de perro guardián tradicionalmente atribuida a los medios de comunicación (Feenstra y Casero-Ripollés, 2014).

Con ello, se potencia la democracia monitorizada, que consiste en la fiscalización de los centros de poder político y económico por parte de la sociedad civil gracias a las herramientas tecnológicas y a la abundancia de información derivadas del entorno digital (Keane, 2009). Supone la emergencia de mecanismos examinadores del poder vinculados a los ciudadanos, que van más allá de las fórmulas establecidas institucionalmente y que conectan con formas de participación política extrarrepresentativas (Schudson, 1998). Así, la ciudadanía adquiere la capacidad de actuar como un contrapoder capaz de denunciar las malas prácticas y los abusos de poder, exigiendo, así, responsabilidades. Los efectos de sus acciones monitorizadoras pueden generar cambios en las decisiones políticas, rectificaciones, dimisiones o la incorporación de nuevos temas de debate a la agenda pública, entre otras consecuencias (Feenstra, 2012). Por lo tanto, la monitorización lleva aparejada un fuerte componente de regeneración democrática.

El objetivo de este capítulo es analizar las características, actividad e incidencia de las plataformas digitales vinculadas a la sociedad civil, que desde Internet y las redes sociales practican el periodismo de datos desde una óptica monitorizadora. La metodología

aplicada se basa en el estudio de casos. Concretamente se analizan cuatro iniciativas: mySociety, Sunlight Foundation, Ciudadano Inteligente y Fundación Civio. Su elección se basa en un doble criterio: por un lado, el territorial, ya que se recogen las principales plataformas en Estados Unidos, Reino Unido, Latinoamérica (Chile) y España, y por otro, la relevancia, que motiva la selección de casos caracterizados por una elevada intensidad en la elaboración de productos informativos basados en el periodismo de datos y, a la vez, dotados de una orientación monitorizadora. Los aspectos estudiados en cada uno de los casos son, por un lado, los objetivos, las fuentes de financiación y las principales iniciativas desarrolladas por estas plataformas. Asimismo, por otro, se analiza el tipo de productos informativos que difunden y los efectos de su actividad monitorizadora sobre la democracia.

## **2. Plataformas digitales de periodismo de datos para la monitorización cívica del poder**

### **2.1. mySociety (Reino Unido)**

El embrión de mySociety se remonta a 1996, cuando un pequeño grupo de desarrolladores interesados en explorar el potencial democrático de internet funda el colectivo UKCOD (UK Citizens Online Democracy, Democracia en Línea de Ciudadanos del Reino Unido), con el objetivo de investigar cómo la gente puede utilizar Internet para intervenir directamente en la política y participar en la discusión de las cuestiones que le afectan, según se describe en su sitio web (<https://www.mysociety.org/>). Tres años después, en 1999, UKCOD paraliza su actividad, y resurge en 2003, auspiciada por un nuevo grupo de voluntarios que lanza el proyecto mySociety.

UK Citizens Online Democracy (UKCOD) es una sociedad limitada registrada como asociación sin ánimo de lucro en Inglaterra y Gales. Su finalidad es realizar y promover investigaciones sobre el uso y los efectos de las tecnologías digitales en cualquier contexto donde exista un electorado, y difundir los resultados en beneficio de los ciudadanos. Su principal actividad es la gestión de mySociety, un proyecto que cuenta con 25 empleados y 10 voluntarios, dedicados al desarrollo de sitios web para la monitorización de la actividad de las autoridades públicas, y también para facilitar información y formación

a los ciudadanos en el manejo de la web 2.0 como herramienta de fiscalización del poder político.

Las investigaciones y portales de mySociety se financian con las donaciones de fundaciones, instituciones públicas, entidades comerciales y ciudadanos. Normalmente, cada proyecto cuenta con uno o varios patrocinadores. En la actualidad, colaboran Omydyar Network, Google.org, The Indigo Trust, Open Society Foundations, The Joseph Rowntree Reform Trust, The William y Flora Hewlett Foundation, Making All Voices Count, Google Ad Grants y Bytemark. En el pasado, mySociety también ha contado con la financiación de GovEval, The Young Foundation, The Esmée Fairbairn Foundation, GeoVation, The Technology Strategy Board, Hivos y John S. and James L. Knight Foundation, así como del Ministerio de Justicia y el Departamento de Transporte del Gobierno británico. Además, cualquier particular puede realizar donaciones puntuales o periódicas desde la página web, vía PayPal o mediante el pago con tarjeta, cheque, transferencia o domiciliación bancaria. Las cuentas de mySociety son públicas y pueden consultarse en el sitio web de la Comisión de Caridad del Gobierno británico. En 2014, los ingresos ascendieron a 1,57 millones de libras, procedentes de donaciones en su totalidad. Respecto a los gastos, se invirtieron 1,42 millones de libras en actividades no lucrativas y 20.000 libras en materia de gobernanza.

Aunque mySociety se circunscribe al ámbito geográfico del Reino Unido, ha desarrollado herramientas y software de código libre para que sus iniciativas puedan aplicarse en otros países. De este modo, como iniciativa pionera en su campo, mySociety ha contribuido e impulsado el desarrollo de un movimiento internacional que confía en el empoderamiento del ciudadano y el uso de las nuevas tecnologías digitales para controlar a los gobiernos. En esta dirección, cuenta con los proyectos *WhatDoTheyKnow* (QueSaben), *TheyWorkForYou* (TrabajaParaTi), *WriteToThem* (Escríbeles) y *FixMyStreet* (ReparaMiCalle), destinados a facilitar la transparencia y el acceso libre a la información, y a monitorizar la actividad de los parlamentarios británicos y promover la participación ciudadana en la vida pública. La mayor parte de sus proyectos han sido reconocidos en diferentes ediciones de los premios New Statesman New Media Awards, por su innovación y contribución a la sociedad civil del Reino Unido.

Respecto a la libertad de información, destaca el proyecto *WhatDoTheyKnow* (<https://www.whatdotheyknow.com>), inspirado en la Ley de Libertad de Información del Reino Unido, que garantiza desde el año 2000 el derecho de cualquier ciudadano a solicitar información del Gobierno. Se trata de un portal web que ayuda a los ciudadanos a encontrar información privilegiada sobre el Gobierno británico, los ayuntamientos y los organismos públicos del Reino Unido, como el Parlamento, el Servicio Nacional de Salud, las Fuerzas Armadas o las escuelas y universidades públicas. También puede usarse para obtener la información que el Gobierno maneja sobre empresas y otras organizaciones. Los ciudadanos dejan sus solicitudes en esta página web, que las envía a las autoridades competentes y publica las respuestas, disponibles para cualquier lector. Existen versiones similares a *WhatDoTheyKnow* a saber en Hungría (<http://kimittud.atlatszo.hu>), Nueva Zelanda (<https://fyi.org.nz>), Israel (<http://www.askdata.org.il>) o España (<http://www.tuderechoasaber.es>), en este último caso de la mano de la Fundación Civio, como se analizará más adelante. Con los mismos parámetros, también es posible dirigirse a las instituciones de la Unión Europea (<http://www.asktheeu.org>).

*WhatDoTheyKnow* cuenta con 30.000 usuarios registrados. Según sus gestores, entre el 15% y el 20% de las peticiones de información al Gobierno se realizan a través de este sitio web, que anima a los ciudadanos a controlar lo que el Gobierno hace con su dinero, porque “cuanto más sepamos del funcionamiento del Gobierno, más capaces seremos de realizar sugerencias para mejorar lo que hacen mal, y celebrar lo que hacen bien”. Hasta abril de 2015, se han efectuado más de 263.000 requerimientos de información a más de 16.000 autoridades. El mayor volumen de consultas afecta a los departamentos de Trabajo y Pensiones (5.798), Defensa (2.329) y Sanidad (1.739). También la British Broadcasting Corporation (BBC) recibe un número significativo de peticiones de información (2.065). Gracias a este portal se han conocido hechos que han derivado en la exigencia de responsabilidades políticas, incluso en dimisiones. Se descubrió, por ejemplo, que los miembros de la Comisión Electoral gastaron miles de libras de dinero público, entre otros, en chicas de compañía o chocolate, porque pagaron estos servicios y productos con las tarjetas



de crédito del Gobierno. También salió a la luz que la *BBC* gastó 10 millones en el alquiler de coches para su personal.

En cuanto a la fiscalización del poder, *mySociety* cuenta con el sitio web *TheyWorkForYou* (<http://www.theyworkforyou.com>), para la monitorización de los parlamentarios británicos. En este portal se informa de la actividad parlamentaria de una manera clara y sencilla, para todos los públicos, con el objetivo de que cualquier ciudadano, sin ser experto en la materia, pueda entender las medidas aprobadas, acceder a los documentos originales y vídeos de los debates, y compartir y enlazar estos datos fácilmente. Los usuarios también pueden comentar las declaraciones de los políticos y recibir alertas por email, cada vez que interviene un parlamentario específico o se menciona un asunto concreto. Además, destaca el valor histórico del portal, que permite remontarse hasta la década de 1930 para consultar debates anteriores. En la misma línea, *WriteToThem* (<https://www.writetothem.com>) facilita el envío de correos electrónicos entre los ciudadanos y sus representantes locales en el Parlamento. Según *mySociety*, muchos políticos han mejorado su manera de responder después de obtener puntuaciones bajas en el ranking de *WriteToThem*. Asimismo, con *FixMyStreet* (<https://www.fixmystreet.com>) los ciudadanos pueden denunciar los desperfectos o incidentes detectados en sus calles y barrios. Los gestores de la web se encargan de hacer llegar la información a la autoridad competente en cada caso.

## **2.2. Sunlight Foundation (Estados Unidos)**

*Sunlight Foundation* es una organización estadounidense no partidista y sin ánimo de lucro, fundada en abril de 2006 por dos abogados, Michael Klein y Ellen Miller, para conectar a los votantes con una amplia oferta de información sobre los candidatos al Congreso a través de internet. El nombre de la fundación deriva de una cita del juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Louis Brandeis, que afirmó que "la luz del sol (*sunlight*) es el mejor de los desinfectantes." De eso se trata, de desinfectar y desenmascarar los "despilfarros" del Congreso, para dar a los ciudadanos "el poder de acabar con la corrupción", explica la propia organización en su ideario. Según detalla su página web (<http://sunlightfoundation.com>), aspira a lograr cambios legislativos para exigir la transparencia en línea de toda la información relacionada con el Gobierno, prestando especial atención



a los flujos de dinero, para controlar cómo éstos tratan de influir en el Gobierno y cómo responde éste, tanto en el ámbito local, como estatal y federal. Para lograr este fin, según afirma, recurre a las herramientas de la tecnología cívica, los datos abiertos (*open data*) y el periodismo de datos, en beneficio de la información a los ciudadanos, para promover una participación democrática más equitativa y eficaz.

La plataforma Sunlight Foundation, que actualmente tiene 40 trabajadores, nace con un capital inicial de 3,5 millones de dólares, aportados por uno de sus co-fundadores. En su sitio web desglosan las donaciones que reciben anualmente para financiar sus proyectos. En 2014 recibieron un total de 6,5 millones de dólares, la mayoría procedentes de fundaciones y particulares. Algunos de sus patrocinadores coinciden con los de mySociety, como Omidyar Network, Open Society Foundations o John S. and James L. Knight Foundation. También cuentan con las aportaciones de Rockefeller Family Fund, Rockefeller Brothers Fund, Global Integrity, Ford Foundation, Transparency International, Investigative News Network, Microsoft y el Banco Mundial, entre otros.

Respecto a sus acciones, pueden enmarcarse en dos grandes ámbitos, la lucha por la transparencia y la creación de bases de datos abiertas para facilitar el acceso a la información. En el ámbito de la transparencia, investigan la financiación de las campañas electorales y monitorizan la actividad legislativa, a través de la presentación de alegaciones a los proyectos de ley sobre la materia. Por ejemplo, a través del proyecto de ley para acabar con el secreto de las donaciones y obligar a la rendición de cuentas de los partidos, concido en EE.UU. como Ley SUPERPAC (*Stop Undisclosed Payments in Elections from Ruining Public Accountability*), Sunlight Foundation ha logrado incorporar algunas de sus reivindicaciones. Así, desde 2012, se ha de detallar el origen de las contribuciones a los partidos y justificar públicamente todos los gastos de campaña. Las organizaciones, empresas y sindicatos que realicen donaciones han de presentar también informes de transparencia. Todos estos informes deben estar disponibles en línea y en formatos de faciliten su consulta por los contribuyentes. También en 2012, en consonancia con las demandas de Sunlight Foundation, la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno estadounidense aprobó la creación de una base de datos centralizada, de acceso público, con toda la información sobre la

contratación de anuncios políticos para televisión. Las cadenas deben facilitar el acceso en línea a estos archivos.

Esta fundación también proporciona herramientas e investigaciones en línea, basadas en el periodismo de datos, para seguir los estrechos vínculos que se establecen entre el sector financiero y los legisladores. Es el caso de la herramienta *Lobbying Tracker*, un registro para monitorizar en tiempo real las reuniones con los *lobbies* o grupos de presión (<http://lobbying.influenceexplorer.com/lobbying/registrations>). También ofrecen información del dinero recibido en diferentes campañas electorales, aunque para conseguir datos más actualizados, delegan en la organización Follow The Money (Sigue el dinero) y recomiendan visitar su página web (<http://followthemoney.org>). Medios de referencia como *The New York Times*, *The Washington Post* o *Reuters* han publicado noticias y reportajes a partir de las investigaciones de Sunlight Foundation. En 2011, por ejemplo, *The Washington Post*, a partir de los registros de esta plataforma, informó que Standard and Poor's gastó más de 11 millones de dólares durante 15 años en el cabildeo o ejercicio de influencia sobre congresistas y senadores y que, al menos un millón, estaba vinculado a legislación aprobada que afectaba directamente a temáticas vinculadas a los intereses de esta compañía.

En el ámbito de creación de bases de datos, interpretan y organizan información que ya es pública pero resulta difícil de obtener e interpretar por parte de los ciudadanos. En su web pueden consultarse, por ejemplo, los archivos correspondientes a las donaciones de la campaña electoral de 2012 y de las últimas convenciones nacionales de los partidos demócrata y republicano. Además, a través del programa *OpenGov Grants*, se han ofrecido becas para proyectos destinados a recopilar y publicar información que haga más transparente la acción del Gobierno. Sunlight Foundation también colabora con gobiernos locales, apoya la labor de ONGs como OpeningParliament.org (<http://www.openingparliament.org>), y desarrolla aplicaciones informáticas para propiciar la configuración de bases de datos. Además, se moviliza para exigir al Gobierno el acceso a información relevante hasta ahora oculta. Es el caso de la actual campaña para que el Servicio de Investigación del Congreso (*Congressional Research Service*), que cuenta con 100 millones de presupuesto, explique públicamente cómo se invierte este dinero.

Entre los logros, en su página web se felicitan porque el Gobierno federal, a instancias de esta fundación, acordó iniciar el proceso de liberación de todos los datos en poder de los organismos federales.

### **2.3. Ciudadano inteligente (Chile)**

La Fundación Ciudadano Inteligente (<http://ciudadanointeligente.org>) se define como una organización laica, no partidista, sin ánimo de lucro, respetuosa y defensora de la diversidad política, cultural, social, religiosa y sexual. Nace a finales de 2009, con sede en Santiago de Chile, con la misión de fortalecer la democracia y reducir la desigualdad en América Latina, mediante la promoción de la transparencia y la participación ciudadana a través de las tecnologías digitales. Trabaja para establecer la cultura del acceso a la información pública y la reutilización de los datos abiertos, impulsar la rendición de cuentas de los distintos poderes y fortalecer la participación ciudadana para conseguir mejorar los mecanismos representativos de la democracia. Para lograr sus propósitos, informar e involucrar a los ciudadanos en la esfera pública, desarrollan aplicaciones web y recurren a las redes sociales. En septiembre del 2011, Ciudadano Inteligente recibió el premio internacional Prix Ars Electronica a las comunidades digitales, un galardón también obtenido, entre otros, por Wikipedia, Creative Commons y los estudios de cine Pixar.

Para asegurar su independencia, Ciudadano Inteligente no recibe financiación del Gobierno, ni de los partidos o de organizaciones con intereses políticos. Se financia a través de las donaciones. En 2014, contó con un presupuesto total de 777.195 dólares, aportados por fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, como Avina, Omidyar Network, Hivos, mySociety o Unicef. Se trata de una cifra más reducida si se compara con los ingresos de mySociety o Sunlight Foundation. En años anteriores, también recibió dinero de Open Society Foundations, el Banco Mundial y Google.

Respecto a los proyectos que Ciudadano Inteligente tiene en activo, destacan las acciones en defensa de la transparencia. Sigue el ejemplo de mySociety y Sunlight Foundation para motivar cambios en la legislación, con campañas como ¿Quién te financia? (<http://quientefinancia.cl>), que recoge firmas para pedir a los candidatos de Chile que informen de la procedencia de las donaciones que reciben. También destaca el portal web ¿Hay acuerdo? (<http://haya>

[cuerdo.ciudadanointeligente.org](http://cuerdo.ciudadanointeligente.org)), donde expone sus alegaciones a los proyectos de ley presentados por el Gobierno. En estos momentos, por ejemplo, mientras se tramita en el Congreso chileno la Ley de Financiamiento de la Política, para que los partidos informen públicamente sobre sus fuentes de financiación, Ciudadano Inteligente usa el sitio ¿Hay acuerdo? para comparar sus propuestas con las medidas del Gobierno. Además, integra de un modo muy activo el uso de redes sociales como Twitter, para fomentar la participación ciudadana en el debate sobre estas cuestiones. El proyecto ¿Quién te financia? también incluye el perfil de Twitter y el correo electrónico de los políticos que tramitan la Ley de Financiación de Políticos en Chile. Se busca que la población pueda contactar con ellos directamente y pedir explicaciones, desde una lógica de la rendición de cuentas y del fortalecimiento de los mecanismos representativos.

Ciudadano Inteligente también ha intervenido en la regulación de la Ley del Lobby, que obliga al registro de los *lobbistas* o gestores de intereses particulares de Chile y al control de sus actividades (<http://www.infolobby.cl>). En concreto, para mejorar esta regulación, Ciudadano Inteligente ha reunido a más de 30 organizaciones que, de manera colaborativa, han elaborado un Reglamento para la aplicación de la Ley del Lobby impulsada por el Gobierno. Fruto de este esfuerzo, en agosto de 2014 se publicó dicho Reglamento en el Diario Oficial de Chile. Esta organización no sólo promueve cambios legislativos. También protagoniza acciones para exigir responsabilidades políticas. En esta línea, en el marco de la investigación judicial por el caso Penta-SQM, en marzo de 2015, ha presentado una querrela por cohecho contra varios senadores, diputados y ex altos cargos del Gobierno de Sebastián Piñera. Los acusa de haber recibido financiación ilegal durante la campaña electoral.

En esta misma línea, Ciudadano Inteligente se emplea a fondo en monitorizar a los congresistas, con el proyecto Congreso abierto (<http://congresoabierto.cl>), y al Gobierno, con Del dicho al hecho (<http://deldichoalhecho.cl>). El primer caso sigue la estela de *TheyWorkForYou* de mySociety. Los usuarios pueden seguir la tramitación de los proyectos de ley en el Congreso chileno, establecer alertas sobre materias de su interés y comunicarse directamente con sus congresistas. En cuanto a la campaña Del dicho al hecho, desde la perspectiva del periodismo de datos, evalúa el grado de cumplimiento

de los programas electorales. Así, respecto al mandato de Sebastián Piñera, entre 2010 y 2014, Ciudadano Inteligente sitúa en un 61% este grado de cumplimiento. Estas iniciativas se complementan con los portales Votainteligente (<http://votainteligente.cl>) y Candideit.org (<http://candideit.org>), espacios que abren nuevos canales de comunicación para la ciudadanía, tanto para plantear dudas sobre las elecciones, manifestar preferencias y realizar simulaciones, como para dirigirse directamente a los candidatos y dialogar con ellos.

La Fundación Ciudadano Inteligente se integra en la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, que aglutina a 22 organizaciones de la sociedad civil de 11 países latinoamericanos. Todos estos países se han sumado a la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria auspiciada en 2012 por Opening-Parliament.org. Ciudadano Inteligente promueve y participa en encuentros internacionales para la colaboración y empoderamiento de la sociedad civil, como Populusaurio (<http://www.populusaurio.cl>), y la defensa de los datos abiertos, como Abrelatam (<http://2015.abrelatam.org>). Igualmente, como mySociety o Sunlight Foundation, impulsa el desarrollo de aplicaciones tecnológicas innovadoras con fines cívicos, a través de las plataformas Desarrollando América Latina (DAL) (<http://desarrollandoamerica.org>) y Poplus (<http://poplus.org>).

#### **2.4. Fundación Civio (España)**

Fundación Civio es una organización sin ánimo de lucro que nació en diciembre de 2011 con los propósitos de ayudar a mejorar la transparencia, exigir rendición de cuentas a las administraciones y promover el libre acceso a los datos públicos. Sus dos fundadores, Jacobo Elosua y David Cabo, apuestan por combinar tecnología y periodismo para lograr estos objetivos. No parece casual que esta iniciativa surja pocos meses después de las movilizaciones ciudadanas del 15M, en mayo de 2011. De hecho, Fundación Civio enaltece a la ciudadanía como motor del cambio. “Creemos en una sociedad construida por una ciudadanía activa y participativa con una fuerte responsabilidad democrática”, indican en su sitio web (<http://www.civio.es>). Mediante el desarrollo de herramientas y aplicaciones “para dar luz al valor cívico de los datos”, investigan y generan información sobre la gestión pública, “para mejorar el



empoderamiento ciudadano y la rendición de cuentas de las instituciones”. Como se aprecia, siguen la estela y la influencia de mySociety, Sunlight Foundation y Ciudadano Inteligente. Tampoco es casual que en la página principal de su web destaquen la afirmación del juez Louis Brandeis, “la luz del sol es el mejor desinfectante”, cita que, como se ha comentado, también inspira el nombre de Sunlight Foundation.

Fundación Civio también reivindica el valor de la libertad para justificar sus propósitos, recordando las ideas de Walter Lippmann (2003), que argumentó que no puede haber libertad para una comunidad que carece de los medios para detectar mentiras. Precisamente, por combatir la mentira y la ocultación de datos, Fundación Civio ha logrado diversos reconocimientos, como el Premio a la Mejor iniciativa no pública de transparencia de 2014, concedido por Open Knowledge Foundation Spain (<http://okfn.es>), y el Premio a la Mejor iniciativa de empoderamiento de 2013, otorgado por la Fundación Cibervoluntarios (<http://www.cibervoluntarios.org>), por poner la innovación al servicio del ciudadano. Además, recientemente, Fundación Civio ha ganado la Global Impact Competition 2015 en España (<http://global.singularityu.org/gic>), que selecciona a emprendedores con proyectos innovadores basados en la tecnología. Este premio consiste en un beca para cursar un programa de postgrado en Silicon Valley (EE.UU.).

Respecto a su financiación, se sustenta con la aportación de donaciones de particulares y de instituciones. También recibe ingresos por la prestación de servicios de asesoría y formación. Publica sus cuentas anuales en su página web. En 2014, ingresó un total de 99.211 euros, 19.064 euros vía donaciones directas y campañas de *crowdfunding*, 42.837 euros por la prestación de servicios y 37.310 euros en becas y apoyos institucionales. Respecto a las donaciones, Fundación Civio cuenta con 117 colaboradores que aportan pequeñas cantidades mensualmente, normalmente entre 5 y 10 euros. Otros 200 ciudadanos y entidades han realizado donaciones puntuales desde 2012, cuando la organización se inscribió en el registro de fundaciones. El equipo de Fundación Civio, dirigido por David Cabo, está formado por 14 personas, entre trabajadores, colaboradores y miembros del patronato.

En cuanto a las acciones que Fundación Civio desarrolla, destaca el proyecto Tu derecho a saber (<http://www.tuderechoasaber.es>),

portal que permite a los ciudadanos pedir información a las instituciones públicas españolas. Está inspirado en *WhatDoTheyKnow* y se ha desarrollado gracias a la tecnología de Alaveteli (<http://alaveteli.org>), una herramienta creada por mySociety desde Reino Unido para ayudar a otros países en el acceso libre a los datos públicos. En este ámbito, según Fundación Civio, todavía impera el silencio administrativo. En 2014, los ciudadanos plantearon 314 peticiones de información a través de Tu derecho a saber, y sólo el 42,7% obtuvo respuesta. No obstante, el dato muestra una ligera mejoría, pues la opacidad superaba el 57% en 2013.

En sintonía con la monitorización de políticos y *lobbies* que efectúa el resto de organizaciones analizadas, Fundación Civio también ha puesto en marcha ¿Quién manda? (<http://quienmanda.es>), un mapa que dibuja los vínculos que se esconden detrás de gobernantes y cargos públicos, sus relaciones con el mundo empresarial y financiero, para que el ciudadano entienda los intereses y motivaciones que trascienden a las decisiones del poder. Este proyecto, que cuenta con el soporte de Global Integrity y Sunlight Foundation, responde a la esencia del periodismo de investigación y aporta información relevante para la ciudadanía y para los medios de comunicación. Las consecuencias de su labor son visibles. Como se destaca en la propia web, ya hay cuatro partidos políticos que publican las agendas completas de todos sus diputados (UPyD, ICV, EUiA y Compromís). El PSOE publica información sobre 40 diputados, pero oculta las reuniones que sus interlocutores prefieren mantener en secreto.

En la misma línea, para fiscalizar a los políticos, Fundación Civio colabora con la iniciativa ¿Qué hacen los diputados? (<http://quehacenlosdiputados.net>), gestionada por otra organización, y cuenta con proyectos propios como ¿Dónde van mis impuestos? (<http://dondevanmisimpuestos.es>), que desglosa y explica los presupuestos del Estado y de las Comunidades Autónomas, El BOE nuestro de cada día (<http://elboenuestrodecadadia.com>), para que no pase desapercibido ningún nombramiento o subvención aprobados por las administraciones, y Digo Diego (<http://digodiego.es>), para que los ciudadanos puedan acceder a los tuits que los políticos publican y después borran. También despierta mucho interés El Indultómetro, la primera web que registra los más de 10.000 indultos concedidos en



España desde 1996 (<http://www.elindultometro.es/index.html>). Gracias a este recurso, se ha sabido, por ejemplo, que el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón (Partido Popular) concedió indultos relacionados con casos de corrupción.

Fundación Civio también ha trabajado activamente para mejorar la Ley de Transparencia en España. En febrero de 2013, junto con Acces Info Europe, realizó con éxito una campaña de recogida de firmas, vía el sitio de petición Change.org, para que la ley obligara a todos los partidos políticos, no únicamente al Gobierno. En defensa de esta transparencia, Fundación Civio también ha logrado que el Gobierno abra al público la base de datos nacional sobre incendios forestales, a la que recurren periodistas y ciudadanos. El equipo de esta plataforma analiza estos datos en la web España en llamas (<http://www.espanaenllamas.es>). Además, publica con frecuencia noticias y reportajes con los resultados de sus investigaciones y proyectos. Por eso, encabeza el Ranking de Innovación Periodística 2014, elaborado por el Grupo de Investigación de la Comunicación (GICOV) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

### **3. Conclusiones**

Al amparo del potencial de la web 2.0, que propicia el libre acceso y difusión de la información, y aprovechando la gran cantidad de datos disponibles en Internet están proliferando nuevas plataformas digitales, vinculadas a la sociedad civil, que empoderan al ciudadano (Castells, 2009; Jenkins, 2006), al que dan voz para exigir responsabilidades a sus gobernantes. Todas ellas articulan sus proyectos y demandas en torno a tres premisas: mejorar la transparencia, facilitar el acceso a la información relativa a gobiernos e instituciones, por considerarla pública, y aplicar las tecnologías digitales para lograrlo. Estos tres motivos responden a un objetivo común, el de renovar los mecanismos representativos de la democracia involucrando más activamente a los ciudadanos en la participación y la vida políticas a través de la fiscalización. En este sentido, mySociety, Sunlight Foundation, Ciudadano Inteligente y Fundación Civio sitúan la monitorización del poder en el centro su actividad. Ésta se orienta, a través del periodismo de datos, al escrutinio público de los centros de poder políticos (Keane, 2009, Feenstra, 2012) y también de los poderes económicos, como los *lobbies*, que son también uno de sus objetivos

preferentes. Un punto común de las cuatro plataformas analizadas es la activación de mecanismos para que la ciudadanía pueda interpelar directamente, a través, de herramientas digitales, a los representantes democráticos. Esto no sólo supone la práctica del ejercicio de rendición de cuentas a través de una extensión y reformulación de la función de perro guardián o *watchdog* (Feenstra y Casero Ripollés, 2014), sino que también puede contribuir, potencialmente, a reducir la distancia entre gobernantes y gobernados, activando las estructuras de representación y renovando su vigencia. Algo que puede favorecer la reducción de la desafección de la política que, actualmente, se sitúa en niveles muy elevados.

Complementan esta labor de supervisión con el descifrado de informaciones opacas, por ejemplo, cuando aclaran y desglosan el complicado léxico legal que dificulta a los ciudadanos entender los presupuestos del Estado o la Ley de Transparencia. En este terreno, aplican estrategias y técnicas propias del periodismo de datos, publicando sus propios informes y reportajes. Con ello, ponen en circulación productos informativos que suponen una actualización y una modernización del periodismo de investigación, especialmente aquel que afecta a los centros neurálgicos del poder en nuestras sociedades. A través de los datos buscan desvelar, haciendo saber y dando cuenta, aspectos de la realidad social desconocidos hasta ese momento. Así, los datos masivos disponibles en Internet pasan a jugar un papel clave como materia prima de un nuevo desarrollo del periodismo de investigación adaptado al entorno digital.

Las acciones de estas plataformas digitales, vinculadas a la sociedad civil, tienen, por lo tanto, un doble efecto. Por un lado, generan consecuencias democráticas, desde el momento en que los ciudadanos recurren a esta vía para exigir que los políticos rindan cuentas de sus acciones y sus errores (Feenstra, 2012). Por otro lado, su actividad informativa, basada en el periodismo de datos, renueva el concepto y la práctica del periodismo de investigación que asume un rol remozado y un nuevo impulso en el escenario digital de la mano de los datos.

## **Referencias bibliográficas**

Casero-Ripollés, A. (2010): “¿El despertar del público?: comunicación política, ciudadanía y web 2.0”. En VV.AA., *Meios de*

*comunicação e cidadania* (Eds., M. Martín Vicente y D. Rothberg). Sao Paulo: Cultura Académica.

Castells, M. (2009): *Communication power*. Oxford: Oxford University Press.

Chaparro Domínguez, M. Á. (2014): “Nuevas formas informativas: el periodismo de datos y su enseñanza en el contexto universitario”, en *Historia y Comunicación Social*, 19, páginas 43 a 54.

Feenstra, R. (2012): *Democracia monitorizada en la era de la nueva galaxia mediática*. Barcelona: Icaria.

Feenstra, R. A., y Casero-Ripollés, A. (2014): “Democracy in the digital communication environment: A typology proposal of political monitoring processes”, en *International Journal of Communication*, 8, páginas 2448 a 2468.

Flores Vivar, J. M. y Salinas Aguilar, C. (2013): “El periodismo de datos como especialización de las organizaciones de noticias en Internet”, en *Correspondencias y Análisis*, 3, páginas 15 a 34.

Fuchs, C. (2014): *Social Media: a critical introduction*. London: Sage.

Jenkins, H. (2006): *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York: NYU Press.

Keane, J. (2009): *The life and death of democracy*. London: Simon and Schuster.

Lippmann, W. (2003): *La opinión pública*. Madrid: Langre.

Mayer-Schönberger, V. y Cukier, K. (2013): *Big data: la revolución de los datos masivos*. Madrid: Turner.

Sampedro, V. (2014): *El cuarto poder en red*. Barcelona: Icaria.

Sánchez-Bonheví, C., y Ribera, M. (2014): “Visualización de la información en la democratización de los datos”, en *El Profesional de la Información*, 23 (3), páginas 311 a 318.

Schudson, M. (1998): *The good citizen: A history of American civic life*. New York: Martin Kessler Books.